

José Pablo Gallo León

Biblioteca de Educación, Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig- Alicante

Dpto. de Información y Documentación
Universidad de Murcia. Campus Espinardo
30100 Murcia

jpablo.gallo@ua.es / josepablo.gallo@um.es
orcid.org/0000-0002-8236-4275

Aproximación a la relación entre bibliotecarios y políticos: un caso específico de la compleja relación entre las esferas política y administrativa

Approach to the relationship between librarians and politicians: a specific case of the complex relationship between the political and administrative spheres

Resumen

Los bibliotecarios, empleados públicos encargados de las bibliotecas, deben mantener una relación constante con los responsables políticos. De ellos depende la dotación e incluso la propia existencia de estos centros. Las propias bibliotecas son o deben ser objeto de la agenda política, para lo que el bibliotecario debe participar en la esfera política. Sin embargo, una mal entendida neutralidad bibliotecaria lleva a una cierta apoliticidad y alejamiento de éste ámbito. El bibliotecario debe conocerlo, implicarse en él y adoptar las herramientas necesarias para la mejora de las relaciones con los responsables políticos, con el objetivo de mejorar el servicio prestado a la comunidad desde sus centros.

Palabras clave: bibliotecas y política; relación bibliotecario y político; relación político-administrativa

Abstract

Librarians, as civil servants in charge of their libraries should maintain a constant relationship with policy makers. The strength and even the very existence of libraries depends on this relationship. The libraries are or should be subject to the political agenda; that's the reason why the librarian must participate in the political sphere. However, a misunderstood neutrality leads to a certain apolitical and away from this area. The librarian must know, get involved in it and take the necessary tools for improving relations with policy makers, with the aim of improving the service provided to the community from their centers.

Key Words: libraries and politics; librarian and politic relationship; political-administrative relationship

Índice

1. Introducción. - 2. Metodología y objetivos. - 3. La relación entre los funcionarios y los políticos: marco general. - 4. La relación entre las bibliotecas y la política. - 5. El bibliotecario y el político. - 6. Conclusiones y propuestas. - 7. Bibliografía.

Contents

1. Introduction. - 2. Methodology and objectives. - 3. The relationship between civil servants and politicians. - 4. The relationship between libraries and politics. - 5. The librarian and the politician. - 6. Conclusions and proposals. - 7. Bibliography.

1. Introducción

Las bibliotecas, su creación, mantenimiento y dotación, son fruto mayoritariamente de una decisión política. Por otra parte, “Vivimos en un mundo político, y las bibliotecas no son inmunes a esto” (Jaeger, Bertot & Gorham, 2013:61). Esto ya de por sí indica claramente la importancia de la implicación del bibliotecario en la política y, por tanto, de su relación con el gestor político más próximo. El bibliotecario debería conocer y explotar los mecanismos de la política y de la toma de decisiones en ese ámbito; y para ello resulta fundamental, sobre todo, su relación directa con el propio político. Esta relación es sólo una variante de la establecida entre funcionarios y políticos, que ha ocupado a los estudios sobre política y administración pública al menos desde que Weber asentó las bases teóricas de la dicotomía entre ambos: uno decide, el otro ejecuta.

Por otra parte, vivimos un momento en el que las bibliotecas están especialmente puestas en duda. La evolución de las tecnologías y los recortes presupuestarios han llevado a cierres y dificultades que no reparan en su valor fundamental para la sociedad y la democracia, de acuerdo con las directrices de la Unesco. En este entorno parece que los bibliotecarios deberían preocuparse especialmente por el fomento de unas relaciones que resultan esenciales para sus centros. Deben dar a conocer a la sociedad sus servicios y su necesidad y, dentro de ello, fomentar las relaciones con los ámbitos de decisión para transmitir estas ideas e influir en la conformación de la agenda.

A pesar de lo dicho, los bibliotecarios, malinterpretando su necesaria independencia y neutralidad, uno de los pilares de su deontología, se alejan de la política, la rehúyen. Así se comprueba en la gran escasez de bibliografía académica y profesional que trate esta realidad. Ésta, además, se centra en los aspectos relacionados con la justificación de las bibliotecas y su relación con la democracia, siendo muy escasos los ejemplos a nivel mundial que se refieran a la relación bibliotecario-político.

La dificultad del planteamiento también viene dada por la gran variedad de realidades que contemplamos. El bibliotecario que se relaciona con el político en una universidad o en una gran biblioteca suele ocupar un puesto de jefe de servicio, reservado al grupo A1 del ramo (Facultativo de Bibliotecas o similar), con complemento de destino 26 a 28 y acceso por libre designación. No obstante, existen algunos casos de jefes de área o subdirectores con complementos de 29 a 30 y, más habitual, que el acceso sea por concurso. Todos ellos pueden ser considerados, por tanto, altos funcionarios.

En el otro extremo, en muchas poblaciones el responsable de la biblioteca es un funcionario del nivel C1 o incluso C2. Es más, comúnmente ni siquiera es funcionario, sino que es un laboral o, a veces, contratado como autónomo, bordeando la figura de la cesión ilegal. Los primeros se relacionarán con directores generales, vicerrectores, gerentes, secretarios generales o grados inmediatamente inferiores de puestos claramente políticos. Estos últimos con concejales y, por tanto también con políticos.

Es por todo ello que parece necesario afrontar un trabajo sobre el tema, alejado de la corriente empírica y/o práctica que actualmente impera en los estudios bibliotecológicos, en los que quizás se eche en falta precisamente una mayor atención hacia los aspectos teóricos y filosóficos.

2. Objetivos y metodología

Con este trabajo se pretende principalmente realizar un acercamiento a la relación existente entre los bibliotecarios y los políticos, determinante para la consecución del éxito de un servicio público con cierto cariz político, como es la biblioteca. A raíz de este objetivo surgen otros como la visión de las relaciones entre políticos y funcionarios en general, cuya aproximación académica ha tendido a centrarse en el estudio de la lucha por las áreas de influencia más que en las propias relaciones entre personas.

Para ello, y como no podía ser de otra forma en un trabajo eminentemente teórico, se utiliza una metodología analítica y lógico-deductiva, en la que adquiere especial importancia el estudio de trabajos anteriores, para lo que se hace necesaria una búsqueda documental precisa. Ésta se ve complicada por la doble utilización de fuentes bibliotecarias y político-administrativas.

Estos materiales se complementaron con el propio conocimiento empírico de la realidad, aun siendo conscientes de que su carga subjetiva podría resultar distorsionadora. Con ello se puede realizar un análisis inductivo, reflexivo y crítico, que establezca las bases de las relaciones entre bibliotecarios y políticos y las posibilidades de su mejora por parte de los primeros.

Debemos realizar una pequeña aclaración terminológica, pues en el texto se utilizan de forma casi sinónima los términos funcionario y empleado público para evitar repeticiones. Sólo en el caso de necesitarse especificar su diferencia se haría notar la misma.

Revisión bibliográfica

Si, como decimos, en este trabajo cobra especial importancia el análisis de los estudios anteriores, resulta conveniente realizar un breve estado de la cuestión por medio de la revisión de la bibliografía sobre la materia. Y nos encontramos que el interés ha sido desigual, incluso demasiado parco, sobre todo en lo que se refiere específicamente a la relación directa del bibliotecario y el político.

En la materia destacan nombres que se repiten frecuentemente, como Audunson, Usherwood o, en el ámbito hispano, Javier Echeverría, Orlanda Jaramillo, Felipe Meneses o Juan Sánchez Sánchez, aunque éste más desde la prensa. Como no tendría sentido alargar indebidamente la bibliografía citando todos los trabajos que tienen un interés colateral en el tema, nos referiremos a varias revisiones que pueden completar fácilmente el interés sobre la vinculación de bibliotecas y política.

Jaeger, Bertot & Gorham (2013:61), señalaban que, a pesar de la importancia de la política para el desarrollo de las bibliotecas, hay una gran escasez bibliográfica. Recordaban los

lamentos de David Shavit en *The Politics of Public Librarianship* (1986), quien citaba a los trabajos de Oliver Garceau en 1949, parte de la famosa Public Library Inquiry, como la última obra reseñable sobre el tema de política y bibliotecas en esos 40 años. Resulta sorprendente este olvido, quizás provocado por una conjunción de motivos, como el interés centrado en aspectos técnicos, el alejamiento de la teoría y el miedo a conculcar la neutralidad. “Lo político [es] un campo, por cierto, comúnmente ajeno a la reflexión bibliotecológica pero definitivo para las prácticas bibliotecarias, especialmente para las de la biblioteca pública” (Jaramillo, Álvarez & Moncada, 2005).

Felipe Meneses (2013), por otra parte autor él mismo de varios artículos sobre el tema, los divide en varias temáticas según su acercamiento: "política y bibliotecología"; "política y bibliotecas"; "política y bibliotecología pública"; y "política y bibliotecas públicas". Ninguno de ellos, como vemos, con relación expresa con el objeto de nuestro interés.

Evjen (2015:28-29) revisó de forma bastante completa la bibliografía existente sobre la relación de política y bibliotecas, aunque incorporando aspectos no directamente vinculados con nuestro tema, como el valor social de la biblioteca, que ha sido el elemento más estudiado. Sí que resultan de mayor interés una serie de investigaciones sobre la actitud de los políticos hacia las bibliotecas públicas (Gazo, 2011; Pearce, 2003; Stenström, 2012; Usherwood, 1993, 2003). Éste último inició en el Reino Unido una serie de trabajos en el marco de un ambicioso proyecto de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) que se debían desarrollar a lo largo del mundo y del que surgieron un puñado de trabajos de interés sobre el interés de los gobiernos en estas instituciones: (Audunson, 2005; Smith & Usherwood, 2003; Stadsmonitor Vlissingen, 2003; Usherwood, 2003). En la misma línea de interés se mueven Michnik (2015) y Evjen (2012; 2015).

Por fin, en la tesis de M^a Dolores Marín (2015), se realiza un trabajo exhaustivo de revisión bibliográfica. Además, y cercanos a nuestro interés por su vinculación con la gestión de personal, varios artículos revisan, total o parcialmente, el impacto de la Nueva Gestión Pública y, sobre todo, de las políticas denominadas neo-liberales en las bibliotecas: cambios de modelo de gestión, centrarse en los deseos individuales en vez de en la colectividad, debilitamiento del sector público, etc. (McMenemy, 2009; Stevenson, 2011; Boughe & Cooper, 2010).

No podemos olvidar el breve manual de Garcia [sic] y Sutherland (2001) sobre los directores de biblioteca pública y su relación con la política y los políticos, éste sí más cercano a nuestros intereses, aunque ya algo añejo.

Por ello, para el desarrollo del artículo se han debido consultar autores ajenos a la bibliotecología, pero que inciden en las relaciones entre funcionarios y políticos. También en este campo hay que señalar que la mayoría de los trabajos se centran en la relación política-administración y la discusión de la dicotomía *weberiana* de la que hablaremos más adelante, pero pocos tratan la relación directa. Entre ellos, Carboni (2010); Jacobsen (2006); Aberbach, Putnam, & Rockman (1981); o Dogan (1975). Michnik (2015:674-675) recoge varios artículos sobre factores que pueden influir en las relaciones, como la propia organización política o motivos personales. En España, destacar la tesis de Quereda (2012), bastante aislada, aunque existen trabajos de cierta antigüedad (Baena del Alcázar, 1988) o el libro de Ramió Matas (2012), que señala las disfunciones del modelo dicotómico en España por la falta de regulación de la dirección pública y la intromisión política en el ámbito

administrativo. También la obra de Bonifacio (2001-2002), que no se centra exclusivamente en esta relación y que amplía el foco al ámbito hispanoamericano.

3. La relación entre los funcionarios y los políticos: marco general

Como hemos adelantado, más que la relación directa entre el funcionario y el político en particular, con su carga psicológica y social, la academia se ha centrado en tratar esta vinculación desde un punto de vista técnico, político-administrativo, hasta el punto de ser uno de los temas centrales de los tratadistas de la administración pública en los últimos dos siglos. Recordemos que el punto de vista clásico, establecido por Woodrow Wilson a finales del Siglo XIX (1883) y, sobre todo, Max Weber (1924), responde al de la conocida dicotomía: el político toma decisiones sobre las líneas estratégicas (políticas) a seguir; el funcionario las lleva a cabo con independencia y guardando el respeto de la ley. "Se espera que los políticos definan políticas, asignen objetivos y responsabilidades, y evalúen los resultados; mientras que a los administradores se les ha atribuido autonomía para gestionar sus propias unidades, siendo responsables de la implementación de los planes políticos", dice Carboni (2010:366) refiriéndose a los cambios acaecidos en la administración pública italiana.

Al fin y al cabo el político es esa cúspide del sistema que señala Weber como aquel que debe tomar las decisiones últimas que ejecutará el funcionario "La dominación burocrática tiene, pues, en su cima inevitablemente un elemento, por lo menos, que no es puramente burocrático" (Weber, 2002:177 y 858). El funcionario "tiene su honor en obedecer las órdenes de su superior, aunque no esté de acuerdo, puede comentar su discrepancia, pero si el superior insiste, al subordinado no le queda otro camino de acción que obedecer" (Vázquez García, 2006:222)

Sin embargo, esta dicotomía tan estricta ha sido puesta en duda por la realidad, produciéndose mutuas injerencias en cada uno de los campos que han señalado numerosos investigadores (por ejemplo Aberbach, Peters & Putnam [1981]; Dogan [1975]; Peters [1987; 2001; 2004]; Putnam, [1973]; Svava [2001]; Suleiman [1984]. Además, Jacobsen, [2006:303] realiza una revisión más exhaustiva). Aunque quizás hable ahora una cierta subjetividad funcionarial, se puede decir que, no obstante, ha sido mucho más frecuente la intromisión de los políticos en el ámbito administrativo que la opuesta o *tecnocracia*.

No opinaba esto el conocido estudio de Aberbach, Peters & Putnam (1981), según el cual, a principios de los 80, en las democracias occidentales se detectaba una creciente implicación del funcionariado en el ámbito político, aunque el modelo dominante (de los cuatro reseñados) era el de la completa confusión de roles. Recordemos que las cuatro imágenes o modelos que estos autores establecieron se correspondían (en la traducción de Querada, 2012:85) con:

- Imagen I, "política frente a Administración": los políticos son los que se hacen cargo de las funciones políticas mientras que los funcionarios realizan las de mera administración.
- Imagen II, "hechos frente a intereses": "tanto los políticos como los funcionarios participan en la elaboración de políticas, pero lo hacen de distinta manera. Los políticos aportan intereses y valores, los funcionarios conocimiento y hechos".
- Imagen III, "energía frente a equilibrio": "tanto los burócratas como los políticos participan en la elaboración de políticas... los primeros [políticos] articulan intereses amplios y

abstractos de individuos sin organizar, los burócratas median en los intereses organizados y con presencia en la esfera institucional".

– Imagen IV, "híbrido puro": desaparecen prácticamente los papeles del funcionario y el político, produciéndose en resumen "la burocratización de la política y la politización de la burocracia".

Peters (1987), por su parte, realiza una escala de cinco niveles en estas relaciones, empezando por el modelo *weberiano*; siguiendo por el llamado "village life", en el que ambos sectores se mueven por los mismos objetivos; después el modelo de *política de confrontación*, cuando políticos y empleados públicos luchan por el control del aparato administrativo; y terminando por el dominado por los funcionarios que podríamos denominar tecnócrata, en el que el político tiene un papel poco relevante.

Frente a esto, James H. Svara propone un modelo complementario en una serie de artículos en torno al cambio de siglo (por ejemplo, 1999; 2001), según los cuales la interdependencia entre empleados públicos y políticos es tal que ambos son necesarios para que funcione la administración pública y, por tanto, complementarios. En la práctica, es una actualización del modelo *weberiano*, pues en aquel la administración necesita de las directrices del político para ponerse en marcha y éste requiere de la administración para cumplir sus objetivos. Svara pretende que debe coexistir una burocracia independiente y un fuerte control político. Que los políticos tengan las herramientas para monitorizar el funcionamiento administrativo, pero que no intervengan el mismo, sólo que lo evalúen.

En esta línea, resulta curioso que el principio *weberiano* de separación entre políticos y funcionarios públicos se señala para Italia como asentado gracias a las reformas impuestas por la Nueva Gestión Pública en la década de los 90. A partir de ahí, esta separación se marca por ley en 1993 (Carboni, 2010:366). Sin embargo, los políticos tienen más independencia en la selección de los gestores públicos dentro de la élite funcionarial, y se han establecido mayores medios de control de la acción de los empleados públicos por parte de los políticos. Esto supone una demostración empírica del modelo complementario de Svara que comentábamos (1999; 2001), equilibrándose el control político y la autonomía administrativa.

Las revisiones del modelo dicotómico no son necesariamente negativas, sino al contrario, pueden favorecer el intercambio de opiniones entre ambos grupos, redundando en la mejora del funcionamiento del estado (Jonsson et al., 2012). No obstante, el principal problema que surge en las relaciones entre políticos y empleados públicos es el "padrinazgo y el clientelismo" (Bonifacio, 2001-2002:85), por el cual los nombramientos no responden al mérito y capacidad, generando una élite funcionarial que responde a intereses personales y de partido, pervirtiendo de forma total la neutralidad del estado.

Jacobsen (2006), a través del estudio de 30 ayuntamientos noruegos, demuestra empíricamente lo que es una evidencia subjetiva, que las relaciones entre políticos y funcionarios no son constantes, sino que dependen de múltiples variables que provocan diferencias entre administraciones semejantes y, dentro de cada una, a lo largo del tiempo: el tamaño de la población, la variedad política del consistorio, el tiempo de relación, la experiencia del empleado público o del político en el ejercicio de sus funciones, etc. Al respecto, señala algo que cualquier alto funcionario ha vivido: la celebración de elecciones o el cambio de políticos supone un periodo de ruptura que se va restableciendo con el conocimiento mutuo y el tiempo.

El conflicto entre políticos y funcionarios está implícito en la progresiva intervención de los primeros en temas de gestión y en el nombramiento de gestores administrativos de origen político y no funcional que se ha producido incluso en los estados donde la administración pública respondía de forma más profunda a criterios *weberianos*.

En los estados con una estructura burocrática consolidada, los políticos ven a menudo limitada su acción por las normativas que son vigiladas y respetadas por un funcionariado que se acoge a ellas. Esto responde a criterios deontológicos y también prácticos. En un ideal *weberiano*, el empleado público vela por el cumplimiento de la Ley, pero también percibe que él es la parte más débil si se conculca esa Ley. Además, sabe que el político pasa, pero el funcionario permanece gobierno tras gobierno; siendo, además, difícilmente revocado por un político gracias a su condición funcional.

Por otra parte, también parece necesario que el empleado público responda de su gestión ante el político atendiendo a legitimación de estos como representantes de los ciudadanos en un estado democrático y como responsables de que se desarrollen una serie de programas políticos. Son ellos los que determinan lo que se considera el interés público y la conformación de la agenda en función del mismo (Hojnaki, 1996). En esto vemos de nuevo la complementariedad de Svara. "La responsabilidad (*accountability*) es uno de los propósitos explícitos de la nueva gerencia pública que implica las relaciones entre gerentes y empleados públicos, ministerios y agencias autónomas, administración y autoridades políticas, administración y ciudadanos" (Bonifacio, 2001-2002:78)

En lo que se refiere a España, y extrapolando los resultados de la tesis de Quereda (2012) para la Comunidad de Madrid, la relación entre políticos y funcionarios no se restringe a uno de los modelos descritos, sino que es, una vez más, compleja, así:

El reparto de tareas políticas y técnicas se caracteriza por la combinación de la Imagen II propuesta por Aberbach et al. (1981) (Los altos funcionarios se limitan en gran medida a aportar conocimientos técnicos y a procesar hechos de forma reglada) y la Imagen IV (los altos cargos con rango de director general son "híbridos" que desempeñan tareas técnicas y políticas), y en menor medida la Imagen III (aunque los altos cargos asumen el grueso de la responsabilidad de intermediación con los intereses sociales, la comparten parcialmente cuando se trata de estar en contacto con intereses particulares). (Quereda, 2012:217).

Aunque ninguno de los modelos teóricos existentes puede describir íntegramente la complejidad de las relaciones sociales y de poder en una Administración concreta, la relación entre políticos y altos funcionarios en la Comunidad de Madrid parece ajustarse bien, con las naturales matizaciones, al modelo "formal legal" propuesto por Peters (1987). (Quereda, 2012:268)

4. La relación entre las bibliotecas y la política

A pesar de que "la yuxtaposición de las palabras biblioteca y política causa un escalofrío de malestar entre los bibliotecarios" (Feather, 2003:1), las bibliotecas necesitan implicarse en este ámbito, pues la creación de una biblioteca es una decisión eminentemente política (Wahnich, 2011:26), y "Los gobiernos federales, estatales y locales están involucrados en la formulación e implementación de las políticas de la biblioteca pública" (Shavit, 1986:7; como se citó en Meneses, 2013).

En cuanto a lo que se refiere a las bibliotecas académicas, también dentro de las universidades el bibliotecario debe saber entrar en el juego político. Elteto y Frank (2013) lo asocian sobre todo a la competición con el resto de agentes de la institución por unos recursos limitados. Se debe conocer y trabajar no sólo con los administradores y personas que tiene el poder de decisión, algo obvio pero no siempre realizado, sino con todo el entorno universitario: hacerse valer, *vender* sus actividades y trabajar los contactos personales. Además, el bibliotecario gestor no debe ser aquel que busca soluciones, sino el que las aporta, el que ofrece estas soluciones a la comunidad y, sobre todo, a los superiores.

No obstante, las dimensiones de la política con relación a las bibliotecas engloban muchos aspectos, no sólo la indicada. Cuando vinculamos ambos términos nos podemos referir a:

- La política bibliotecaria, su determinación, inclusión de los asuntos bibliotecarios en la agenda
- La relación de los bibliotecarios y los políticos, como parte fundamental de los *stakeholders*, algo que se relaciona a menudo con el punto anterior
- El activismo político de las bibliotecas y los bibliotecarios
- El sesgo político de servicios y, sobre todo, colecciones: la utilización de la biblioteca para la difusión o imposición de una ideología
- La difusión y alfabetización de la democracia y de los procedimientos políticos
- Las bibliotecas especializadas en ciencia política: su gestión, desarrollo de colecciones, fuentes, tipologías de usuarios, etc.
- La biblioteca como instrumento de la democracia según se define en el estilo manifiesto Unesco: valor social de la biblioteca, formación y cultura de la sociedad, abierta a todos, en todos los lugares... cultura y educación para todos, e incluso como foro ideal para el desarrollo del debate público y político (Alstad & Curry, 2003), en relación con la esfera pública de Habermas y el tercer lugar de Oldenburg. También como impulsora de la transparencia y ésta como herramienta contra la corrupción (Sturges, 2008)

Se refiere este texto básicamente a esa relación directa bibliotecario-político, pero no obstante conviene dar unas pinceladas de otros aspectos de especial importancia para las bibliotecas.

En primer lugar, surge la necesidad de que las bibliotecas estén presentes en la agenda política. Buena parte de las relaciones directas se orientan en este sentido: que sean tenidas en cuenta de cara a la planificación y la gestión. Incluso su propia existencia es un acto de voluntad política, como decíamos. Aunque se consideren obligatorias por la legislación, dentro de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local o en las diversas normativas autonómicas sobre bibliotecas; y nadie conciba una universidad sin biblioteca, esto no quiere decir que éstas estén dotadas convenientemente. Incluso se incumple la legislación en numerosos casos, o se cumple saliendo del trámite con unas instalaciones de nula utilidad real.

Esto se produce porque "Los temas relativos a las bibliotecas públicas son políticamente pequeños y no se priorizan en la agenda política" (Michnik, 2015:674). Jaeger, Gorham, Bertot & Sarin (2014) inciden en que debemos intervenir en el ámbito político, en la discusión de la esfera pública, para que las bibliotecas sean tenidas en cuenta y, por tanto, entren a formar parte de la configuración de la agenda. Se trata de un libro dedicado a la importancia que tiene para la biblioteca la participación en la política de cara a asegurar su futuro. No basta con que conozcamos el valor que las bibliotecas públicas tienen para la sociedad si para buena parte de ésta somos una institución obsoleta y desconocen nuestras funciones. Pocas veces se oye mencionar a las bibliotecas en los programas electorales de políticos, siendo un

servicio básico según la legislación; o de los rectores, a pesar de constituir, a menudo, la mayor unidad de cada universidad. Así lo podemos comprobar en la tesis de M^a Dolores Marín, para el ámbito local y municipal, o lo denuncia reiteradamente Juan Sánchez en diversos artículos de prensa y profesionales¹ (1994). Pero este desconocimiento es generalizado, no sólo en España, sino en países de mucha mayor tradición bibliotecaria, como indican diversos autores (Michnik, 2015; Gazo, 2011; Tuleu, 2011; Sveum and Tveter, 2012), aunque también se encuentran algunos casos más favorables, como Dinamarca (Evjen, 2012 citado por Michnik, 2015:673).

En este sentido, Alan Boughey & Mike Cooper (2010) realizan un esclarecedor análisis de las políticas bibliotecarias en el Reino Unido entre 2003 y 2009. Comparando lo que la política bibliotecaria proponía con lo que la sociedad demandaba (a través de encuestas e informes), resultaba que a menudo las políticas bibliotecarias imponían lo que se creía necesario para los ciudadanos y no lo que estos pedían. De ahí la necesidad de dar a conocer claramente estas necesidades, de ayudar en la toma de decisiones y conformación correcta de la agenda.

No obstante, una cosa es la demanda de los usuarios de las bibliotecas, otra los conocimientos del propio bibliotecario sobre hasta dónde se podría llegar, y una tercera la percepción social sobre las mismas. Al fin y al cabo, los políticos reflejan en la agenda lo que la sociedad, sus votantes, les demandan. Y en ello la biblioteca no suele ser prioritaria. En tiempos de restricciones, la cultura es lo primero que cae, pues todos son favorables a mantener otros servicios sociales antes que estos, quizás erróneamente.

Los ciudadanos pagan impuestos y exigen servicios adecuados; aunque quizás los culturales y, en particular, los bibliotecarios, sean los últimos de la lista. Aun así, la presencia de las bibliotecas, su existencia ha generado en sí mismo una necesidad que provoca el anhelo de la imitación en localidades colindantes, así como la oposición a su cierre. Difícilmente un ciudadano puede echar de menos un servicio que le es desconocido completamente (Marín, 2015:37).

Y ¿qué puede llevar a que se tome la decisión política de la construcción de un nuevo centro, incluso en las actuales condiciones de presupuestos restrictivos? Otro estudio (Evjen, 2015) nos ayuda a identificar las causas. Para ello analiza una serie de casos concretos de grandes bibliotecas públicas: Aarhus, Birmingham y Oslo, todas ellas iconos desde su inauguración. Y resulta sorprendente para los bibliotecarios encontrar que, si bien los políticos legitiman las bibliotecas (públicas) por su vinculación con el desarrollo cultural y social, deciden construir una biblioteca pensando en el desarrollo urbano de una ciudad o barrio. O sea, desde un punto de vista sobre todo económico: las bibliotecas como polo de desarrollo y como regeneradoras de entornos, como se ha visto desde Medellín a Hamburgo. Es una argumentación que se puede utilizar junto con el estudio del ROI o retorno de la inversión de la propia biblioteca, campo en el que recientemente se está trabajando de forma muy interesante desde el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística)².

El caso es que hay que asegurarse que nos conozcan para continuar en la agenda, sin confiar en exceso en una cierta simpatía política (al menos en el Reino Unido, donde escribía Feather

¹ Por ejemplo, Sánchez Sánchez, J. (1994). Bibliotecas públicas y partidos políticos. Las políticas bibliotecarias en los programas electorales (1977-1993). Boletín de la ANABAD, 44(2), 123-176.

² Como por ejemplo con el estudio *El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas* (Gómez Yáñez, 2014).

[2003]). La propia ubicación de la biblioteca puede ser objeto de una decisión en función de preferencias y afinidades políticas.

"Las bibliotecas públicas son un producto de la historia. Al igual que otras instituciones públicas, las bibliotecas públicas funcionan en el contexto de diferentes sistemas políticos. Debido a esto, hay diferentes puntos de vista en cuanto a su propósito político. Las bibliotecas públicas en todo el mundo son financiadas por los gobiernos de alguna descripción. La existencia de estas bibliotecas se encuentra en un entorno político que podría no ser del todo favorable para ellas." (Smith and Usherwood, 2003: 76).

Y es esto, las diferencias en las políticas bibliotecarias de acuerdo con el color o sesgo político han sido objeto de varios estudios. En el debate sobre un cierto determinismo ideológico a la hora de tratar las políticas culturales, educativas y, en nuestro caso, bibliotecarias, se tiende a pensar que los gobiernos de izquierdas son más favorables a las bibliotecas públicas, algo que es difícil corroborar tras un rápido vistazo al desarrollo comparado entre los diferentes sistemas autonómicos y municipales en España durante la etapa democrática.

Si nos atenemos a la realidad internacional, vemos opiniones en ambos sentidos. Ni Sveum & Tveter (2012), ni Evjen (2012), encuentran que haya un impacto ideológico en el tratamiento de las políticas de lectura pública. Tampoco Crook (1999), en un estudio australiano, encontraba variaciones significativas. Frente a esto, el estudio de Usherwood (1991, 1993) para el Reino Unido traslucía ligeras diferencias, aunque recordemos que esto fue antes del *nuevo laborismo*; Mientras que Hendry (2000), sí encuentra sustanciales variaciones entre las políticas de conservadores y laboristas para las bibliotecas públicas. También el mucho más reciente estudio de Storstad (2010) las señala para Noruega. Todo ello hace afirmar a Michnik, (2015:680) que "la afiliación política entre los políticos locales parece ser relevante, pero no en gran medida".

Frente a esto, también hay debate sobre la afiliación y activismo político desde las propias bibliotecas. Hay cierto empeño en acabar con la neutralidad de las bibliotecas desde diversos bibliotecarios como Felipe Meneses o en la línea editorial de publicaciones académicas como la revista *Progressive librarian*. Durrani & Smallwood (2006) intentan desechar el "mito de la biblioteca neutral", afirmando que, si la biblioteca no se acerca a la política y mantiene su neutralidad, no será capaz de ofrecer la información que necesitan sus usuarios inmediatos sobre el funcionamiento del mundo. Esto es obvio, pero eso no significa que no mantenga la neutralidad. Olvidan que mantener la neutralidad no quiere decir no tener libros políticos, sino dar cabida a todas las opiniones. En el referido trabajo de Crook (1999) se señalaba algo importante: que la creencia universal en las virtudes de las bibliotecas independientemente del color de los políticos se reforzaba por su carácter ideológicamente neutral.

5. El bibliotecario y el político

"Quienes se inician en esta carrera suelen pensar que las principales dificultades con las que se van a encontrar estarán relacionadas con la biblioteca en lugar de con cuestiones políticas. Con el tiempo se sorprenden al comprobar que dedican la mayor parte del tiempo a problemas que aparentemente no afectan al funcionamiento diario de la biblioteca y que se resuelven en instancias ajenas a su ámbito inmediato. Estos problemas escapan con frecuencia al control de la biblioteca y no parecen guardar relación con los servicios que se ofrecen en ella." (García y Sutherland, 2001).

Este párrafo de su obra sobre los bibliotecarios y la política refrenda claramente la importancia de la relación entre ambos para el devenir de las bibliotecas, pues “ninguna biblioteca puede existir sin un estrecho contacto con los políticos porque la política bibliotecaria forma parte de la política local.” (Rodríguez Parada, 2002:305). Algo, en realidad, trasladable a todos los tipos de biblioteca. Cualquier bibliotecario que haya tenido experiencia en gestión, independientemente del nivel del centro, es consciente de eso. Y si no lo percibe, indudablemente se ve reflejado en los resultados de su biblioteca.

Ya hemos visto que, en primera instancia, los políticos suelen demostrar un gran desconocimiento de las funciones y realidad de las bibliotecas. Y esto puede complicar mucho la gestión a los bibliotecarios que, al más puro estilo *weberiano*, "recibimos de los políticos el encargo del servicio bibliotecario poco definido y lo debemos concretar y/o planificar" (Pérez-Salmerón y Amorós, 2003). Así, los bibliotecarios debemos partir a menudo prácticamente de cero, aunque intentemos, como hemos visto, encuadrarnos en unas pautas más generales. De esta forma, una comunicación fluida entre bibliotecario y político resulta determinante para la consecución de nuestros objetivos.

Sin embargo, como decía Desrichard (2011), existe una gran incompreensión y desconocimiento mutuo. Para un político, una biblioteca es una gran partida de gasto a la que no termina de ver utilidad. Por ello, este autor aboga por reforzar la idea de servicio comunitario, social, pues eso sería el mejor eslogan. Resulta así significativa la aportación de un político (Palma, 2004), aunque estuviese personalmente interesado en estos temas. Recordaba que el político prioriza sus acciones en función de la importancia o repercusión que estas van a tener. O sea, definiendo la agenda política. Por ello, es importante hacerle llegar datos concretos, acciones contundentes que le ayuden a entender la importancia de la biblioteca.

Por otra parte, esta relación que se establece entre el bibliotecario y el político no es en términos de igualdad (Tuleu, 2011). El político dispone, y el bibliotecario (el funcionario, el burócrata del esquema dicotómico), ejecuta. En este vínculo intervienen factores como las relaciones personales o las particularidades de cada comunidad (localidad, universidad...).

Michnik, de nuevo (2015:683), se encarga de refrendar la trascendencia de los factores personales en las relaciones entre políticos y bibliotecarios, aspecto que ha sido recogido en diferentes estudios. Por ejemplo, Stenström & Haycock (2014), que señalaban la influencia de la personalidad en la toma de decisiones, o Pors (2005), que concluía que la experiencia de los bibliotecarios era un factor importante para captar la atención de los políticos, junto con el interés personal de los mismos. En ello, el cambio de responsable político tiene una gran repercusión en la continuidad o supresión de políticas bibliotecarias, incluso aquellas de gran éxito, como el conocimiento empírico de casos como el murciano o el castellano-mancheño nos demuestra.

En el mismo artículo se refrenda un dato curioso: que la relación entre el político y el bibliotecario suele ser más sencilla y respetuosa curiosamente cuanto más grande es la estructura: ayuntamiento mayor, universidad más grande, etc. Según Pors (2005:111), en las bibliotecas públicas “Sólo el 53% de los gestores de bibliotecas pequeñas se consideraban fuertemente respetados” por los responsables políticos, porcentaje que subía al 80% en bibliotecas más grandes. Esto probablemente sucede porque no hay tanto solapamiento entre las funciones entre ambos. En las administraciones de mayor tamaño, la separación resulta mucho más clara.

Estas relaciones responden a una gran variedad de factores que influyen en las mismas. Según Curry (1994), y refiriéndose a la vinculación entre bibliotecarios y políticos locales, intervienen las presiones políticas, el equilibrio de poder entre políticos y de estos con los bibliotecarios, los programas de cada concejal, el prestigio del propio bibliotecario o el estatus de los servicios bibliotecarios entre las autoridades. Por ello, se debe estar al tanto de estos factores, conocer las inclinaciones e intereses de cada responsable y los programas e intenciones de cada partido.

García y Sutherland (2001), por su parte, enumeraban estos factores de influencia que, de forma sumaria, serían:

- I. Estructura gubernamental (complejidad, a quién nos debemos dirigir)
- II. Percepción que tienen de la biblioteca los representantes electos y otros cargos públicos.
- III. Ética, pues un bibliotecario puede encontrarse en situaciones que comprometen su ética, como contrataciones de servicios, productos o personal o composición de la colección)
- V. Planificación, que aunque sea a largo plazo, debe adaptarse a las directrices del equipo de gobierno de turno.
- VI. Gestión económica, que es el campo que requiere un mayor esfuerzo en la relación con los políticos.
- VII. Programas de servicios bibliotecarios, que requieren de financiación y a veces nos viene impuestos sin planificación previa.

La comunicación, además, se ve influida por otros factores que evolucionan con el tiempo, como el conocimiento mutuo, el marco cultural, la coyuntura económica, el marco legal, o la acción de otros grupos de influencia como asociaciones de vecinos o estudiantiles, sindicatos, etc. Usherwood (2003), utilizando los datos del estudio de la IFLA que él inició, concluye que, dada la enorme variedad de rasgos que influyen en la relación (ideología, relaciones personales, realidad económica, configuración social, etc.) no se pueden aportar recetas concluyentes, sino que deberemos adaptarnos a estos factores.

Aunque cualquiera distingue que, como acabamos de señalar, los presupuestos de gasto son el principal argumento de esta relación, existen otros puntos de interés y conflicto. Se habla a menudo de aspectos de relaciones laborales vinculados a la selección de personal, traslados etc., tanto en los procedimientos de contratación laboral como en los funcionariales o de carrera administrativa.

El enfrentamiento con el gestor político puede ir mucho más allá de la defensa de unos presupuestos cuando estamos hablando de estados totalitarios que limitan el desarrollo del propio servicio: orientación política de las colecciones, censura de títulos o restricciones de uso para algunos colectivos. Si la biblioteca es una entidad democrática el bibliotecario debe oponerse, si es necesario, a los dictados del responsable político, algo que coincide con su condición de empleado público.

También, como indican García y Sutherland (2001), “No se trata meramente de conseguir más dinero para mi biblioteca”. Debemos influir en la percepción que de las bibliotecas y los bibliotecarios tiene la sociedad pública o sociedad política, demostrando su carácter necesario en el ámbito democrático y para el desarrollo de esta sociedad.

De todo ello se trasluce la necesidad de la preparación del bibliotecario y del conocimiento de campo. Sobre lo segundo, este debe ser un conocimiento profundo y real de nuestro entorno, no sólo de percepciones, sino basado en evidencias. Por ello, Molz (1994) diferencia entre un conocimiento de la realidad *amateur* y otro *profesional*.

Además, el bibliotecario debe adquirir conocimientos y capacidades. Entre ellos, la utilización de herramientas básicas que incrementen su ascendencia sobre los políticos, y su presencia en este entorno. A pesar de lo dicho sobre los múltiples factores, Usherwood (1984; 2003) proporciona una serie de recomendaciones que pueden ayudar, como son:

- Asegurarse que se conoce personalmente a todos los políticos, establecer vínculos invitándolos a diversas actividades de la biblioteca.
- Utilizar la prensa, pero no abusar de ella.
- Contactar con líderes comunitarios que no sean políticos, personas que ejerzan su influencia sobre la comunidad.
- Utilizar la influencia de las asociaciones profesionales.

Aunque apuesta por luchar fuerte por nuestros servicios, también aconseja que un exceso de beligerancia puede ser contraproducente, que hay que utilizar con cuidado la influencia de terceros y que se debe tomar en consideración el clima político, pues si se rompe la relación de confianza ésta será muy difícilmente recuperable.

En el ya citado estudio de Carboni (2010) sobre las relaciones entre políticos y funcionarios en Italia, de las entrevistas realizadas se desprende la necesidad de capacidades de negociación y diálogo, del necesario entrenamiento de las funciones empáticas.

"En cuanto a la *dimensión personal* de la relación, casi todos los políticos entrevistados señalan la importancia de las actitudes individuales, aparte de las competencias profesionales, no sólo por la naturaleza de la interacción, sino también para la eficacia de la acción administrativa". (Carboni, 2010:374).

Esta idea era compartida por los altos funcionarios, que veían beneficiosa una buena relación para la consecución de los objetivos.

Por fin, Goulding, Walton, y Stephens (2012) insisten en la necesidad de que los bibliotecarios responsables adquieran o cultiven sus capacidades de negociación, conozcan el funcionamiento del ámbito político y la planificación estratégica de cara a conseguir los resultados adecuados para las bibliotecas.

De todo esto se desprende que en un entorno tan complejo, sobre el que hemos visto que pueden influir cuestiones personales e ideológicas, pero evidentemente también legales, burocráticas y de funcionamiento político, se requiere que el bibliotecario tenga una gran formación en estos temas. El bibliotecario debe conocer el funcionamiento político, como conoce ya el administrativo. Este manejo del entorno político sólo puede ser beneficioso para nuestro centro, pues posibilitará la trasmisión de lo que hacemos y de nuestras necesidades, que serán entendidas por los políticos y por la comunidad en general. Es fundamental "para los bibliotecarios, para el servicio de biblioteca y para los ciudadanos que los bibliotecarios públicos comprendan y aprecien más claramente el mundo político de la biblioteca pública"

(Garceau, 1949:239; como se citó en Meneses, 2013). Es más, el bibliotecario puede llegar a "disfrutar participando en ella." (Garcia y Sutherland, 2001).

En definitiva, "para obtener una buena comunicación con los agentes locales y cargos políticos de nuestros municipios, el bibliotecario debe sentirse parte del mismo equipo de trabajo, sentirse como un agente de cultura municipal más. Ser uno de ellos, y junto con los otros colegas ser pro-activo en el desarrollo cultural de la comunidad" (Pérez-Salmerón y Amorós, 2003).

Hacia un *lobby* bibliotecario

Pero la interacción político-bibliotecario no tiene por qué ser exclusivamente individual. Son conocidas las campañas de la American Library Association para ejercer influencia sobre la legislación estadounidense en temas que le afecten. En un entorno próximo, la campaña *No al préstamo de pago en bibliotecas*³ intentaba que no se traspusiese la directiva europea que obligaba al pago de un *canon* a las bibliotecas en virtud de los derechos de autor por el préstamo de obras. En la misma línea, la llamada *Marea amarilla* se oponía a los recortes en bibliotecas públicas, pero diluyéndose en otras *mareas* más amplias e incluso perdiendo la exclusividad del color.

Éstas acciones vienen a demostrar ciertos males que afectan al asociacionismo bibliotecario: dispersión, con múltiples asociaciones en liza; fallos en el foco, pues no tiene sentido oponerse a una directiva europea, sino que se debe centrarse en su adaptación a nuestra realidad, como finalmente se ha hecho; y falta de presencia social.

Recordemos la importancia de la acción de promotores o emprendedores políticos (*policy entrepreneurs*) quienes influyen en la conformación de las agendas y entre los que se cuentan los *lobbies* o grupos de presión. Por ello, sería deseable contar con organizaciones fuertes o, más bien, con una organización única coordinada con otras europeas. De alguna forma, FESABID ejerce esta función, pero limitada por la gran dispersión y disparidad, a veces oposición, de las asociaciones que federa; algo que parece puede estar en vías de solución. A nivel mundial se cuenta con organizaciones internacionales como la IFLA, integrada en la UNESCO, pero más como toma de ejemplo moral que como posibilidad real de ejercer esta influencia. Durante un tiempo fundaciones como la Bertelsmann o la Germán Sánchez Ruipérez⁴ también ayudaron con su influencia, pero hoy en día han perdido presencia.

Se intentó ganar peso dando oficialidad a entes como las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria, que derivó en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria⁵, donde por cierto se dio voz a FESABID; o REBIUN (la red de bibliotecas universitarias), que se asoció a la CRUE y puso a sus órganos de decisión en manos de los vicerrectores del ramo. Pero la situación sigue sin ser la deseable, y se debería apostar por una mayor influencia a través de un asociacionismo fuerte, que tuviese presencia en la política nacional y autonómica, ayudando así a los bibliotecarios de cualquier nivel.

³ <http://noalprestamodepago.org/>

⁴ Desgraciadamente, ambas fundaciones han perdido bastante impulso en estos ámbitos <http://www.fundacionbertelsmann.org/> y <http://www.fundaciongsr.com/>

⁵ <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/consejocb/presentacion.html>

6. Conclusiones y propuestas

Las relaciones entre políticos y bibliotecarios aún no han sido suficientemente investigadas. De hecho, ni siquiera las relaciones generales entre empleados públicos y políticos han recibido la atención necesaria, al menos en nuestro entorno. Se echa en falta estudios de campo con entrevistas o encuestas que analicen la situación más allá del plano teórico y del acercamiento más generalista sobre la vigencia de la dicotomía *weberiana*.

Sobre la propia relación, podemos indicar que en ella entran en juego muchos factores, y que el bibliotecario no está convenientemente preparado para afrontarlas. Se requiere de una formación sobre política, así como un entrenamiento de las capacidades de negociación, que no se adquieren en las facultades de documentación. Esto parece extensible al resto de los funcionarios públicos, por lo que, una vez más, parece necesaria la profundización de la formación de los gestores públicos por medio de cursos y escuelas de administración pública.

Finalmente, sería interesante que las organizaciones bibliotecarias tendiesen a la convergencia y ejerciesen de verdadero grupo de presión a la hora de hacer más presentes las bibliotecas en la agenda pública, facilitando además el ejercicio individual del intercambio bibliotecario-político.

7. Bibliografía.

- ABERBACH, J.D., PUTNAM, R. D., & ROCKMAN, B. A. (1981). *Bureaucrats and Politicians in Western Democracies*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- ALSTAD, C., & CURRY, A. (2003). "Public space, public discourse, and public libraries". *LIBRES*, 13(1), accesible en http://libres-ejournal.info/wp-content/uploads/2014/06/Vol13_I1_pub_space.pdf
- AUDUNSON, R. (2005). "How do politicians and central decision-makers view public libraries? the case of Norway". *IFLA Journal*, 31(2): 174-182. <http://dx.doi.org/10.1177/0340035205054882>
- BAENA DEL ALCÁZAR, M. (1988). "Reflexiones sobre la relación entre políticos y altos funcionarios". En Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. *Gobierno y administración en la Constitución*, v. 1. Madrid: Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, pp. 331-360
- BONIFACIO, J. A. (2001-2002). "Políticos, funcionarios y gerentes: el interés público en la encrucijada". *Revista de Administración Pública*, 33-34: 71-100, accesible en : <http://revistas.upr.edu/index.php/ap/article/view/626/579> [consulta 16/05/2016].
- BOUGHEY, A., & COOPER, M. (2010). "Public libraries: political vision versus public demand?". *Aslib Proceedings*, 62(2): 175-201. <http://dx.doi.org/10.1108/00012531011034982>
- CARBONI, N. (2010). "Professional Autonomy versus Political Control: How to Deal with the Dilemma. Some Evidence from the Italian Core Executive". *Public Policy and Administration* 25(4): 365-386. <http://dx.doi.org/10.1177/0952076709356886>
- CROOK, E. (1999). "Public Libraries and Political Ideologies". *Australasian Public Libraries and Information Services (APLIS)*, 12(4): 178-183.
- DESRICHARD, Y. (2011). "Les liaisons dangereuses". *Bulletin des bibliothèques de France*, 56 (2), accesible en <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf2011020001001>

- DOGAN, M. (1975). *The Mandarins of Western Europe: The Political Role of Top Civil Servants*. New York: John Wiley and Sons.
- DURRANI, S. & SMALLWOOD, E. (2006). "The Professional is Political: Redefining the Social Role of Public Libraries". *Progressive Librarian*, (27): 3-22, accesible en http://www.progressivelibrariansguild.org/PL_Jnl/contents27.shtml
- ELTETO, S., & FRANK, D. G. (2003). "The politics of survival in the postmodern library". *Portal: Libraries and the Academy*, 3(3): 495-501. <http://dx.doi.org/10.1353/pla.2003.0055>
- EVJEN, S. (2012). *Placing the public library : a comparative analysis of political perceptions* (Tesis). Copenhagen: Royal School of Library and Information Science.
- EVJEN, S. (2015). "The image of an institution: Politicians and the urban library project". *Library & Information Science Research*, 37(2015): 28-35. <http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2014.09.004>
- FEATHER, J. (2003). "Libraries and politics: where two worlds meet". *Journal of librarianship and information science*, 35(1). <http://dx.doi.org/10.1177/096100060303500101>
- France, 56(2): 23-26, accesible en <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-02-0023-004>
- GARCEAU O. (1949). *The public library in the political process*. New York: Columbia University Press
- GARCIA, J. Y SUTHERLAND, S. (2001). *Directores de biblioteca pública en la arena política*. Barcelona: Fundación Bertelsmann, accesible en <http://goo.gl/fxKWub>
- GAZO, D. (2011). "City councillors and the mission of public libraries". *New Library World*, 112(1/2): 52-66.
- GÓMEZ YÁÑEZ, J. A. (coord.) (2014). *El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas. Estudio Fesabid*. Madrid: Fesabid. <http://hdl.handle.net/10421/7447>.
- GOULDING, A., WALTON, G., & STEPHENS, D. (2012). "The Importance of political and strategic skills for UK library leaders". *Australian Library Journal*, 61(2): 105-118.
- HENDRY, J. D. (2000). "Past neglect and future promise: The condition of UK public libraries now and over the last 20 years". *Library Review*, 49(8): 442-447. <http://dx.doi.org/10.1108/00242530010378500>
- HOJNAKI, William P. (1996). "Politicization as a civil service dilemma". En H. Bekke; A. G. M. Hans; J. L. Perry; T. A. Toonen (eds.) *Civil Service systems in comparative perspective*. Bloomington: Indiana University Press (Public Affairs).
- JACOBSEN, Dag Ingvar (2006). The Relationship between Politics and Administration: The Importance of Contingency Factors, Formal Structure, Demography, and Time. *Governance: an International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 19(2), 303-323. DOI: 10.1111/j.1468-0491.2006.00316.x
- JAEGER, P. T., GORHAM, U., BERTOT, J. C. & SARIN, L. C. (2014). *Public Libraries, Public Policies, and Political Processes: Serving and Transforming Communities in Times of Economic and Political Constraint*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield
- JAEGER, P. T., BERTOT, J. C. & GORHAM, U. (2013). Wake Up the Nation: Public Libraries, Policy Making, and Political Discourse. *Library Quarterly*, 83(1), 61-72
- JARAMILLO, O., ÁLVAREZ ZAPATA, D. & MONCADA P., D. (2005). Políticas públicas para bibliotecas públicas: una propuesta de soluciones locales a problemas globales. *Investigación bibliotecológica*, 19(39), 13-27, accesible en <http://goo.gl/9ROct9>
- JONSSON, L., NILSSON, V., WÄNSTRÖM, J., HELLSTRÖM, M., & RAMBERG, U. (2012). *Dilemman isamarbete mellan politiker och tjänstemän (Dilemmas in Cooperation between Politicians and Administrators)*. Göteborg; Nationella kommunforskningsprogrammet.

- MARÍN JIMÉNEZ, M. D. (2015). *Política bibliotecaria y elecciones: propuestas electorales sobre bibliotecas públicas en las elecciones autonómicas y municipales de Castilla-La Mancha* (Tesis doctoral inédita). Murcia: Universidad de Murcia, accesible en <http://hdl.handle.net/10803/33416>
- MCMENEMY, D. (2009). "Rise and demise of neoliberalism : time to reassess the impact on public libraries". *Library Review*, 58(6): 400-404. <http://dx.doi.org/10.1108/00242530910969758>
- MENESES TELLO, F. (2013). "Bibliotecas y política: el paradigma político de la política". *Anales de Documentación*, 16(2). <http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.16.2.172471>
- MICHNIK, K. (2015). "Public library managers' descriptions of political attention". *Library Management*, 36(8): 673-684, accesible en <http://search.proquest.com/docview/1753391758?accountid=17225>
- MOLZ, R. K. (1994). "The Public Library Inquiry as Public Policy Research". *Libraries & Culture*, 29(1): 61-74, accesible en <http://www.jstor.org/stable/25542621>
- PALMA ZAMBRANA, R. (2004). "La biblioteca en la política cultural municipal". *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, (75-76), 97-100, accesible en <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1289751.pdf>
- PEARCE, S. (2003). *How do national politicians view the role and value of the public library service?* (Trabajo fin de máster inédito). Sheffield, UK: University of Sheffield.
- PÉREZ-SALMERÓN, G. y AMORÓS, J. (2003). "¿Qué nos falta a los bibliotecarios para conseguir comunicar con los políticos municipales?". *World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council 1-9 August 2003*. Berlin: IFLA, accesible en <http://goo.gl/TIL0vB>
- PETERS, B. G. & Pierre, J. (2001). *Politicians, Bureaucrats and Administrative Reform*. London: Routledge.
- PETERS, B. G. & Pierre, J. (2004). *Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The Quest for Control*. London: Routledge.
- PETERS, B. G. (1987). "Politicians and Bureaucrats in the Politics of Policy-Making". En J. E. Lane (ed.) *Bureaucracy and Public Choice*. London: Sage Publications.
- PORS, N. O. (2015). "Changing perceptions and attitudes among danish library managers and directors: the influence of environmental factors". *New Library World*, 111(11/12): 455-467. <http://dx.doi.org/10.1108/03074800510587327>
- PUTNAM, R. (1973). "The political attitude of senior civil servants in Western Europe : a preliminary report". *British Journal of Political Science*, 3(3): 257-290. <http://dx.doi.org/10.1017/S0007123400007870>
- QUEREDA SABATER, J. (2012). *Políticos y funcionarios en la Comunidad de Madrid : la relación entre los altos cargos y los altos funcionarios en la administración madrileña*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública
- RAMÍO MATAS, C. (2012). *La extraña pareja: la procelosa relación entre políticos y funcionarios*. Madrid : Los Libros de la Catarata
- RODRÍGUEZ PARADA, C. (2002). "La biblioteca pública: un servicio ligado a un proyecto de ciudad". *Anales de Documentación*, (5): 303-308, accesible en <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/2081>
- SHAVIT, D. (1986). *The Politics of Public Librarianship*. New York: Greenwood.
- SMITH, K. & USHERWOOD, B. (2003). "Public library politics: an international perspective". *Australian Public Libraries and Information Services*, 16(2): 76-80.
- STADSMONITOR VLISSINGEN (2003). *Political perceptions of public libraries in the Netherlands*. [La Haya]: Netherlands Public Library Association, accesible en http://www.fobid.nl/sites/fobid/files/1300_Political_perceptions.pdf

- STENSTRÖM, C. AND HAYCOCK, K. (2014). "Influence and increased funding in Canadian public libraries: the case of Alberta in fiscal year 2009-10". *The Library Quarterly*, 84(1): 49-68. <http://dx.doi.org/10.1086/674035>
- STENSTRÖM, C. L. (2012). Factors influencing funding decisions by elected politicians at the state/provincial level: A case study of public libraries in Canada (Tesis doctoral inédita) dissertation). Queensland: University of Technology, accesible en http://eprints.qut.edu.au/59510/1/Cheryl_Stenstrom_Thesis.pdf
- STEVENSON, S. (2011). "New labour in libraries: the post-Fordist public library". *Journal of Documentation*, 67(5): 773-790. <http://dx.doi.org/10.1108/00220411111164664>
- STORSTAD, O. (2010). *Kommunal kultursektor i endring (The Change of Municipal Cultural Sector)*. Oslo: Norsk kulturråd.
- STURGES, P. (2008). "Corruption, transparency and a role for libraries". *Innovation*, (37): 1-14, accesible en <http://www.ajol.info/index.php/innovation/article/view/42724>
- SULEIMAN, E. (1984). *Bureaucrats and Policy Making: A Comparative Overview*. New York: Holmes & Meier.
- SVARA, J. H. (1999). "Complementarity of Politics and Administration as a Legitimate Alternative to the Dichotomy Model". *Administration & Society* 30: 676-705. <http://dx.doi.org/10.1177/00953999922019049>
- SVARA, J. H. (2001). "The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the Past and Future of Public Administration". *Public Administration Review*, 61(2): 176-196. <http://dx.doi.org/10.1111/0033-3352.00020/>
- SVEUM, T. AND TVETER, F. (2012). "Norwegian public libraries and governmental reports: visions and economic realities". *New Library World*, 113(7/8): 351-363. <http://dx.doi.org/10.1108/03074801211244977>
- TULEU, B. (2011). "Trop loin, trop proche: les politiques et la bibliothèque". *Bulletin des Bibliothèques de France*, 56(2): 14-17, accesible en <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-02-0014-002>
- USHERWOOD, B. & PEARCE, S. (2003). "Influencing the politicians". *Public Library Journal*, 18(4): 83-85.
- USHERWOOD, B. (1984). "Influencing Politicians". *European Journal of Marketing*, 18(2): 82-89. <http://dx.doi.org/10.1108/EUM00000000004772>
- USHERWOOD, B. (1991). "Politics and the public library service". *Journal of Librarianship and Information Science*, 23(2), 75-85.
- USHERWOOD, B. (1993). "Public library politics: the role of the elected member". London: Library Association Publishing.
- VÁZQUEZ GARCÍA, R. (2006). "Weber y su concepción de la democracia posible". *Andamios*, 3(5): 213-236, accesible en <http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v3n5/v3n5a11.pdf> [consulta: 12/06/2016].
- WAHNICH, S. (2011). "À quoi sert une bibliothèque ?". *Bulletin des Bibliothèques de*
- WEBER, M. (2002). *Economía y sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.